Globethics Repository



Los aprendices de brujo [The sorcerer's apprentices]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Lander, Edgardo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-18 05:57:45
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220485

NUEVA SOCIEDAD NRO.121 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1992 , PP. 124-133

Los aprendices de brujo. Retos tecnocráticos a la política venezolana*

Lander, Edgardo

Edgardo Lander: sociólogo venezolano. Docente e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Autor de varias obras, entre ellas: Contribución a la crítica del marxismo realmente existente y Verdad, ciencia y tecnología.

Los insistentes discursos y reiteradas iniciativas neoliberales encaminados a la desvalorización de la política y los partidos, y a la deslegitimación de los valores democráticos - unidos a la práctica de tomar las principales decisiones acerca del presente y futuro del país en los espacios donde se supone que ellas sean convalidadas de acuerdo al modelo democrático liberal -, han terminado por producir un quiebre - quizá fatal - en la legitimidad del régimen democrático venezolano.

Cuando el actual gobierno venezolano asume el poder en febrero de 1989, el país se encontraba en una profunda crisis cultural, ética, política y económica[1]. La caída sostenida de los niveles de vida de la población, el peso de la deuda externa, una inflación que amenazaba convertirse en hiperinflación, una balanza de pagos deficitaria, un déficit fiscal acumulado e insostenible, los niveles generalizados de corrupción, el deterioro de la confianza en el sistema político, y el cinismo creciente de la población en relación a éste, son las expresiones más visibles de esta crisis. La presente crisis no es - por lo tanto - nueva, ni es responsabilidad exclusiva del actual gobierno o de su política económica. Esta democracia en la cual la participación en la toma de decisiones ha estado limitada a cogollos partidistas y empresariales plagados de corrupción, que manejaron durante décadas el país como su patrimonio privado, progresivamente venía perdiendo legitimidad. Lo que sí es responsabilidad del actual gobierno - y en particular de su equipo económico - es la profundización de la crisis política y social hasta niveles tales que en el momento de escribir estas páginas resulta imposible predecir cuál es el futuro a corto plazo

[1]Sobre el agotamiento tanto del modelo de acumulación como del modelo de hegemonía de la Venezuela democrática, v. Luis Gómez Calcaño, Margarita López Maya, y Thais Mamgón: Del Pacto de Punto Fijo al pacto social. Desarrollo y hegemonía en Venezuela (1958-1985), Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas, 1989.

del régimen democrático en Venezuela. La legitimidad de este régimen sufre en manos del equipo económico del gobierno de Carlos Andrés Pérez un quiebre quizás fatal. Esto es consecuencia de la concepción tecnocrática de la sociedad que se ha venido imponiendo en el mundo y en el país. Sobre la responsabilidad de los dirigentes políticos del populismo clientelar y, en particular, de los cogollos y de los corruptos - tanto públicos y privados - en la crisis del sistema político venezolano se ha hablado mucho. Eso está claro, no es necesario insistir. Es indispensable sin embargo destacar otra responsabilidad: la de tecnócratas honestos y llenos de buenas intenciones que creían estar salvando al país[2].

El programa de ajuste y el sistema político

Dada su visión estrechamente tecnocrática, los expertos neoliberales ya sean del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Ministerio de Coordinación y Planificación (Cordiplan) o del Ministerio de Hacienda, parecen ser absolutamente incapaces de comprender la naturaleza compleja del orden social, y de los procesos históricos, políticos y culturales como realidades propias e irreductibles a variables económicas cuantificables. Ante la profunda crisis que venía gestándose en el sistema político venezolano pretenden un remedio exclusivamente económico sin darse cuenta de que por esa vía no se podía sino profundizar la crisis. Este pensamiento tecnocrático que ha orientado las políticas para salir de la crisis parece mirar al mundo con unos lentes a través de los cuales sólo aquellos aspectos de la realidad que tienen que ver con la economía, especialmente con los aspectos cuantificables de la macroeconomía, tienen existencia, estando ausente la consideración de los valores compartidos, los sentidos de pertenencia y de identidad individual y colectiva, las nociones de pasado común y visiones de rumbo y prospectiva de futuro, en fin: política, religión, arte, representaciones colectivas, organización social, tradiciones, costumbres. Es a partir de una visión reduccionista del mundo donde todas estas dimensiones son ignoradas - o por lo menos consideradas como variables de importancia secundaria que se acomodarán a los cambios económicos - que los tecnócratas de este gobierno, estos aprendices de brujo, comienzan su peligroso experimento social en 1989.

[2] No hay, por supuesto, ninguna relación necesaria entre tecnocracia y honestidad en el manejo de los bienes del Estado. Uno de los más importantes integrantes del equipo económico de Carlos Andrés Pérez, Pedro Tinoco, hasta hace poco presidente del Banco Central, ha sido acusado insistentemente de favorecer ilícitamente a sectores del capital financiero, con los cuales él tiene estrechas relaciones, a través de la emisión de los bonos cero cupón con altísimas tasas de interés.

Partiendo del supuesto de que los problemas económicos del país tienen su origen en la política, en los partidos, en la intervención del Estado en la economía, en el clientelismo y la corrupción, actúan como si se pudiera, simplemente, eliminar la política de la vida colectiva. Parece que los problemas principales (o quizás únicos) de la economía venezolana tienen que ver con la ineficiencia y corrupción del Estado, y que por lo tanto, la solución a todos los problemas está en la desregulación, en la privatización, y en general, en la limitación de la injerencia del Estado en la actividad económica. La crítica a la corrupción y al clientelismo se convierte en la crítica a la idea misma de partidos como formas de conformación, organización y representación de los intereses colectivos. La política, y los políticos son - por principio sospechosos. La crítica a la demagogia y al populismo se convierte en la crítica a la idea misma de democracia como modelo político de decisión colectiva sobre el presente y el futuro de la sociedad en base a la existencia de propuestas alternativas[3].

Como consideran que han precisado técnicamente dónde residen los problemas del país, y que ellos saben exactamente qué es lo que hay que hacer, deciden que no tiene sentido empantanar estas decisiones con el fango de los debates y procesos democráticos. Los electores no tienen por qué participar en el proceso de toma de decisiones en relación a las políticas que se piensa desarrollar[4] . Los programas de gobierno forman parte de un ritual que debe acompañar las campañas electorales, pero en nada tienen por qué comprometer a los candidatos electos en base a esos programas. Como ha ocurrido en otros casos notorios de América Latina, en especial con Carlos Menem y con Alberto Fujimori, los electores votaron por una cosa y obtuvieron otra. Entre dos programas electorales, uno de corte claramente neoliberal (Eduardo Fernández, candidato del partido socialcristiano COPEI), y otro al menos ambiguo al respecto, y con reminiscencias de la época del populismo de la Gran Venezuela, tal como las vallas publicitarias ofreciendo el pleno empleo por parte de Carlos Andrés Pérez (por Acción Democrática), el electorado escogió la segunda opción. Sin embargo, el programa efectivo de gobierno no había sido sometido a la consideración de los electores: había sido ya negociado con los organismos financieros internacionales al margen del proceso democrático venezolano. Este programa de gobierno es el resultado de las exigencias de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que había visitado al país en 1987[5] . En base al in-

[3]Para un planteamiento extremo en este sentido, v. Aníbal Romero: La miseria del populismo. Mitos y realidades de la democracia en Venezuela, Ediciones Centauro Caracas, 1987.
[4]Esto es consistente con el modelo schumpeteriano de la democracia asumido expresamente por el pensamiento neoliberal, de acuerdo al cual los electores eligen personas pero no políticas. V. Edgardo Lander: «Venezuela: democratización y autoritarismo...», op. cit.
[5]Fondo Monetario Internacional: «Venezuela: Staff Report for the 1987 Article IV Consultation», 16 de octubre de 1987 (Confidencial, para uso exclusivo de los bancos acreedores).

menso poder que le otorga el hecho de que el país necesita renegociar su deuda externa - situación que requiere un programa de ajuste con el visto bueno del FMI - la misión del Fondo precisa cuáles son los reajustes que requiere la economía venezolana. El diagnóstico y las recomendaciones del FMI parten del supuesto de que «...la habilidad de Venezuela para obtener nuevo financiamiento en el exterior depende del programa económico que se lleve a cabo»[6]. El programa que se exige es una ortodoxa terapia de choque para lograr el ajuste estructural de la economía venezolana, con énfasis en sus efectos macroeconómicos.

El 28 de febrero de 1989, a los pocos días de la ceremonia de toma de posesión del gobierno de Carlos Andrés Pérez, Pedro Tinoco (presidente del Banco Central), Eglée Iturbe de Blanco (ministra de Hacienda) y Miguel Rodríguez (ministro de Cordiplan) firman - a nombre del Gobierno de Venezuela - una carta de intención [7] en la cual se compromete al país a «un programa de ajuste económico», mediante el cual se aspira a tener «acceso a los recursos del Fondo correspondientes a los tramos superiores de su cuota», a celebrar «un acuerdo de Contingencia con el Fondo» y a «solicitar recursos del Fondo a través de la Facilidad Compensatoria y del Financiamiento de Contingencias». Igualmente, el documento compromete al gobierno venezolano a limitar las restricciones a las transacciones internacionales y reestructurar la deuda externa, evitando caer en nuevos atrasos en sus pagos[8].

Punto a punto, cada una de las «recomendaciones» que había formulado la misión del FMI en el año 1987, se convierte en compromiso que el gobierno venezolano adquiere con dicho organismo como condición para el proceso de renegociación de la deuda externa[9]. Estos acuerdos no son sometidos ni siquiera a la consulta del Congreso de la República, y sólo son conocidos por ese cuerpo y por la opinión pública después de haber sido firmados. La historia republicana de Venezuela no registra otra situación en la cual todo el proceso de toma de decisiones del país responda tan claramente a exigencias externas y en la cual los procesos políticos internos resulten tan irrelevantes. En la misma semana de febrero en que se firmaba la carta de intención, en Caracas y en las principales ciudades del país ocurren protestas sociales en la forma de disturbios y saqueos generalizados de una magnitud desconocida en el país. El gobierno no considera que ello sea motivo suficiente para reconsiderar su política y reafirma su programa económico.

[6]FMI: op. cit., p. 23.
[7]Memorándum sobre Políticas Económicas de Venezuela», dirigido al señor Michael Camdessus, director gerente del Fondo Monetario Internacional.
[8]Ibíd.
[9]Las únicas excepciones - temporales - están en las políticas destinadas a mantener ciertos subsidios a unos pocos productos y servicios básicos, y de subsidios muy limitados a los créditos otorgados a la agricultura y para la adquisición de «viviendas sociales».

Aparte del llamado paquete económico, las decisiones más importantes que se están tomando hoy en relación al futuro del país son los programas de expansión masiva de la industria petrolera. A pesar de que entre los primeros objetivos planteados en el programa de gobierno de Carlos Andrés Pérez para lograr esa «otra Venezuela que todos queremos» están el liberar al país de la presión de la deuda externa y de la dependencia del petróleo[10], se formula un plan de inversiones calculado en 50.000 millones de dólares entre 1991 y 1996[11]. Sólo para el año 1991, PDVSA presentó al Ministerio de Energía y Minas un programa de inversiones superior a 200.000 millones de bolívares[12], lo que representa la cuarta parte del total del presupuesto nacional para ese año. Un monto de recursos de esta magnitud significa una dependencia aún mayor de la economía venezolana en los hidrocarburos, acentuando los rasgos más perversos de la economía petrolera, y profundizando el carácter monoproductor del país. Son éstas las decisiones que están diseñando la Venezuela del próximo siglo.

¿Cómo se procesa esto en el sistema político? ¿Cómo se debaten y deciden las opciones en relación al futuro del país? Los partidos políticos y el parlamento están excluidos de toda consideración significativa de estos asuntos. El parlamento se supone - en la teoría democrática liberal - como el lugar privilegiado de la política, el espacio en el cual se debate la más amplia gama de alternativas en relación al presente y futuro de la sociedad. Si bien esto no ha correspondido nunca a la realidad de la democracia venezolana que concentra todas las decisiones más importantes en el autoritarismo centralizador del presidente y su círculo más inmediato de colaboradores, la distancia entre teoría y práctica se profundiza en la medida en que se radicaliza la crisis de los partidos. Los dirigentes políticos, incluidos los parlamentarios, dedican proporciones crecientes de su tiempo a las pugnas internas por el poder al interior de sus partidos o al proceso infinito de acusaciones, defensas y contraacusaciones de corrupción, que se ha convertido en el tema que ocupa más espacio en la prensa nacional. Los programas de inversión para la industria petrolera nacional se le presentan al Congreso Nacional en la forma de propuestas globales, en exposiciones orales en las cuales es imposible una discusión informada, ni siquiera una evaluación de los supuestos en relación a proyecciones de mercados y

[10]Acción de gobierno..., op. cit., p. 4.
[11]Según Luis Giusti, coordinador de planificación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), de este monto, 32.000 millones de dólares corresponden a PDVSA y el resto a aportes de capital de socios extranjeros en empresas mixtas con la industria petrolera, petroquímica y carbonífera nacional. «PDVSA invertirá 1,8 billones de bolívares» en El Nacional, Caracas, 15/5/91, p. D-9.
[12]«Presupuesto de 1991 aprobará asamblea de accionistas. Inversiones de PDVSA superan 200.000 millones de bolívares» en El Diario de Caracas, Caracas, 26/12/91, p. 9. Esta inversión es muy superior a las inversiones totales (en todas las ramas de la actividad económica incluida la industria petrolera) previstas por el VIII Plan de la Nación para el año 1991.

precios, que sirvan de sustento a las propuestas[13] . En consecuencia, en el Congreso se da un debate genérico sobre el significado del petróleo para el país y la importancia de nuevas inversiones[14]. En este debate no se menciona siquiera la posibilidad de que esos recursos pudiesen tener mejor uso en otras actividades económicas, ni se discute sobre la conveniencia de hacer depender toda la economía del país de los vaivenes del mercado petrolero[15]. Igualmente ausentes en este debate están las consideraciones políticas sobre las implicaciones de acentuar los niveles actuales de centralización en el proceso de toma de decisiones estratégicas de la sociedad. Tampoco se discuten las consecuencias de la profundización de la subordinación a los centros de decisión financieros internacionales que están necesariamente implicados en los niveles de endeudamiento, que serían indispensables para llevar a cabo estos programas de inversión[16] , o el sentido que pueda tener un aumento significativo de la producción petrolera en momentos en los cuales se debate en el mundo la necesidad urgente de una disminución en la emisión de los gases con efecto invernadero mediante la reducción drástica del consumo de combustibles fósiles. Los programas de expansión de la industria petrolera se presentan simplemente como un imperativo técnico, sobre el cual hay poco que debatir.

En este modelo de transformación de la sociedad están ausentes la idea de política; la búsqueda de legitimidad; el concepto de actores y fuerzas sociales que actúan, se enfrentan y negocian; toda noción sobre procesos de construcción de consensos. Tampoco están pensadas las formas mediante las cuales la población pueda participar en las transformaciones de la sociedad que se están proponiendo. Como los problemas de la sociedad son vistos como cuestiones de técnica económica (y de

[13]El Congreso venezolano tiene muy limitado apoyo técnico que le permita dar cuenta - desde una interpretación independiente - de los problemas sobre los cuales tiene que decidir. De esta manera la mayor parte de sus decisiones se basan en informaciones tal como son suministradas por el Ejecutivo.

[14]Versión taquigráfica de las intervenciones de Freddy Muñoz (MAS), Carmelo Lauría (AD) y Humberto Calderón Berti (Copei) en el inicio del debate sobre política petrolera en la Cámara de Diputados, Congreso de la República, Caracas, mayo de 1991.

[15]Algunos analistas petroleros, entre ellos Francisco Mieres, argumentan que a mediano plazo se producirá una disminución del consumo petrolero de los países de la OCDE, y que además - dados los costos de la explotación del petróleo pesado que representa 80% de las reservas del país - Venezuela no podrá competir con los precios del Medio Oriente una vez que se restablezca la producción y se pongan en marcha los actuales planes de expansión de dicha región (Conferencia en la Escuela de Sociología, Universidad Central de Venezuela, 15/5/91)

[16]Desde el punto de vista político, la consecuencia más negativa de la deuda externa está en la pérdida de niveles de autonomía nacional para definir y desarrollar políticas económicas. Sin embargo, para el pensamiento tecnocrático, este hecho no es una limitación sino, por el contrario, una virtud de la nueva situación que vive el país. Si las propuestas que se formulan tuviesen que ser sometidas al debate político, con mucha probabilidad resultarían derrotadas. Sin embargo, en la medida en que son consideradas como condicionantes externos, parámetros que necesariamente «tenemos» que reconocer como una realidad objetiva, estas decisiones se imponen sin depender de los resultados del debate político.

exceso de política) no se considera necesaria su discusión en términos políticos. Es tal el menosprecio por la política, y la desconfianza en la opinión de la gente, que ni siquiera se plantea como problema la conveniencia de persuadir a la población de la necesidad de los ajustes propuestos[17].

Del diagnóstico de la inviabilidad de continuar con el endeudamiento para consumir más de lo que se produce, por ejemplo, no se deriva un programa de austeridad nacional que - obviamente - tendría que afectar más a quienes se habían beneficiado de la época de bonanza. Esto requería alguna noción de meta o rumbo nacional en el cual a cada uno le tocara su parte de esfuerzo y sacrificio. Ocurre todo lo contrario. La libertad de lucro sin limitaciones - y el consumo agresivamente ostentoso como alarde del éxito económico - se considera parte de las condiciones necesarias para generar confianza para la inversión extranjera y para el retorno de los capitales nacionales que habían sido colocados en el exterior. Es tal la ausencia de reflexión sobre las dimensiones no económicas de la vida colectiva, que ni siquiera está presente la búsqueda de un mínimo de legitimidad que haga posible la estabilidad política como parte de las condiciones capaces de generar confianza. Parece creerse en la total incapacidad de respuesta de la proporción (mayoritaria) de la población afectada por el ajuste. El momento en que la mayoría de la población vive el deterioro más marcado de sus niveles de vida constituye el momento del máximo derroche. Los carros de lujo que proliferan por las calles de Caracas; las propagandas de las tarjetas de crédito de acuerdo a las cuales prácticamente no se es un individuo si no se tiene acceso a los privilegios que ofrecen dichas tarjetas; los restaurantes ostentosos que están repletos todos los días de la semana; y el despilfarro gubernamental son un insulto, una bofetada diaria en la cara de una mayoría de la población que no cuenta con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. La corrupción adquiere otro sentido en épocas de hambre. Lo que en períodos de abundancia era tolerado con complicidad o indiferencia, es hoy vivido como una afrenta directa en un nuevo juego de suma cero en el cual el robo de unos se convierte en la carencia de otros.

En una sociedad en la cual han desaparecido las opciones ideológicas y las decisiones que deben tomarse no son consideradas como políticas sino como técnicas, tampoco hacen falta las organizaciones políticas. Los partidos pueden ser reducidos a su función estrictamente electoral. Hay un discurso de acuerdo al cual la crisis de los partidos sería «una ventana de oportunidad» para una sociedad más democrática, menos mediatizada por la manipulación y el clientelismo partidista, y

[17]A lo máximo que se llega en ese sentido es al «reconocimiento» de que hay fallas en la política informativa del gobierno, y que - en consecuencia - la población no ha «entendido» el significado de las reformas.

que abre las puertas a una más amplia participación ciudadana. Sin embargo, en ausencia de alternativas efectivas de expresión de las aspiraciones e intereses de los diversos sectores de la sociedad que reemplacen de alguna manera el papel tradicionalmente desempeñado por los partidos[18], su crisis es una crisis de la organización y la representación de la sociedad venezolana. Los partidos entran en crisis sin que ello pueda explicarse como consecuencia de su sustitución por otras formas más democráticas y más participativas[19] . No es la sustitución de una forma de organización y representación por otra, sino la creación de un vacío de representación. Esta crisis afecta en primer lugar a los sectores populares que carecen de formas de representación legítimas[20]. Sus intereses y aspiraciones no tienen voz en el sistema político venezolano actual[21].

Los efectos políticos del ajuste

Hoy estamos en capacidad de evaluar los efectos de este intento de salir de la crisis. Vivimos en una sociedad sin organización, con espacios de participación extremadamente restringidos, sin lugares de pertenencia y de identidad individual y colectiva. La mejor expresión de esa forma «moderna» de democracia ciudadana fue la forma en la cual los venezolanos nos relacionamos con el intento golpista del 4 de febrero de 1992: una sociedad fraccionada, de individuos aislados cada quien frente a su televisor. El 4 de febrero de 1992 nos permitió una mirada privilegiada detrás de la fachada de normalidad de la democracia venezolana, y descubrimos una realidad para muchos insospechada. No podía ser mayor el contraste entre esta actitud pasiva, de expectativa ante lo que pudiera pasar con el golpe militar - a pesar de que para la casi totalidad de la población la orientación ideológica de los golpistas era una incógnita - con la movilización masiva, tanto espontánea como organizada, con la cual fueron derrotadas las intentonas militares del primer año

[18]Las organizaciones que más se destacan en el discurso político venezolano como expresión de la nueva democracia ciudadana participativa y no mediatizada por los partidos, son las organizaciones vecinales de los sectores medios. V. Grupo Roraima: Más y mejor democracia, Caracas, 1987. Sin embargo, tanto en términos de los asuntos que se dirimen por esa vía, como por la cobertura social de estas organizaciones, se trata de procesos muy parciales que de ninguna manera dan cuenta de los problemas de la organización y la representación en la sociedad venezolana actual.

[19] De acuerdo a recientes encuestas de opinión, los partidos políticos son los actores-instituciones que tienen un menor nivel de credibilidad en el sistema político venezolano. V. Marcelino Bisbal y Pascuale Nicodemo: «La credibilidad de la democracia» en Sic, año LV, Nº 5432, 3/1992, Centro Gumilla, Caracas, pp. 53-54.

[20] Entre las organizaciones más descompuestas, y carentes de legitimidad - entre otras cosas como consecuencia de reiterados casos de corrupción - está la principal central obrera del país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Ibíd, pp. 53-54.

[21]Esta ruptura entre el sistema político y amplísimos sectores de la población se manifestó en los acontecimientos de febrero de 1989, en los cuales los dirigentes políticos del país demostraron su total incapacidad para expresar o canalizar las inquietudes y demandas de la población.

de la democracia en 1958. Efectivamente, pudimos constatar cuánto había cambiado el país.

El resultado de este proceso de desmontaje de la política y de cuestionamiento sistemático de cada uno de los valores que le dieron sentido a la idea de democracia venezolana en el pasado - las ideas de participación, de solidaridad, igualdad, de responsabilidad de la sociedad en relación a todos los ciudadanos y de soberanía nacional ha sido el de convertir a la democracia en una forma carente de contenido. Los dos aspectos medulares de la idea de democracia, como proceso de toma de decisiones colectivas (democracia como procedimiento), mediante la cual se realiza la idea de la soberanía popular, y como resultado (democracia sustantiva), en términos de las nociones de justicia social, y de responsabilidad colectiva en relación a la suerte y condiciones de vida de sus ciudadanos, han sufrido una arremetida radical por parte de la tecnocracia neoliberal.

El régimen democrático venezolano actual no puede ser legitimado a nombre de la participación y responsabilidad de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el presente y el futuro del país. Son cada vez más evidentes las limitaciones de esta participación. Tampoco a nombre del Estado de bienestar o de la justicia social. Estos conceptos están siendo erradicados del diccionario político venezolano. Estas fuentes de legitimidad han sido corroídas por la arremetida de los aprendices de brujo[22].

Si se vacía de contenido a la democracia sacando del proceso político la toma de decisiones y se deslegitiman todos los valores que sirvieron de sustento a la idea de democracia, no tiene por qué sorprender que - en respuesta - exista en la población un mayor escepticismo en relación a las virtudes de este régimen político, ni que en el momento del intento de golpe militar los ciudadanos venezolanos permanecieran pasivamente a la espera del resultado de los acontecimientos y no hubiese nadie dispuesto al menor sacrificio por defender este régimen democrático. Si la po-

[22]Esta incapacidad para comprender la gravedad de la situación política que vive el país la ilustran las declaraciones de los portavoces del gabinete económico en los días siguientes al golpe. Cuando el país entero está conteniendo la respiración para ver si el gobierno sobrevive, y hay un clamor generalizado para una rectificación en la política económica, Miguel Rodríguez, ex ministro de Cordiplan y nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, declara que «no habrá cambios en la política monetaria y cambiaria» (El Universal, 27/2/92, Cuerpo 2, p. 1). El viceministro de Hacienda afirma que las concesiones que el Presidente se ha visto obligado a hacer «no cambian lo sustantivo del programa» (El Diario de Caracas, Caracas, 7/3/92, p. 17). En el mismo sentido, el director gerente del Fondo Monetario Internacional declara que hay que seguir adelante con la misma política y que el liderazgo no debe hacerse «complaciente» ni acceder a las demandas del populismo (El Nacional, Caracas, 12/2/92, p. D-7).

blación se siente alienada, distante, al margen del sistema político, se limitará, como de hecho ocurrió durante el intento de golpe, a ver los toros desde la barrera.

Aún más profundo que el impacto político es la incidencia social y cultural de los procesos de ajuste. No hay meta alguna que pueda justificar moralmente una generación de niños desnutridos mientras los sectores de altos ingresos viven una eclosión de consumo suntuario. No puede justificarse éticamente que la cuarta parte del presupuesto se dedique a pagar una deuda que fue contraída más para la subvención al empresariado y a la corrupción, que para el bienestar de la población, mientras el Estado carece de los recursos mínimos para la atención primaria de salud y el sistema educativo colapsa.

Desde el punto de vista cultural, esta sociedad está viviendo un proceso de desgarramiento de su tejido constitutivo. El único valor que es reconocido es el dinero, el único éxito admitido es el que conduce a la prosperidad material. ¿Cómo no reconocer que esa disonancia radical entre lo que se ofrece como lo que hay que tener y la imposibilidad de lograrlo no puede conducir sino a la desesperanza, o - cuando se asume una actitud más activa - al comercio con drogas, el único camino abierto hoy a la juventud de los barrios caraqueños para tener acceso a los símbolos de prestigio con los cuales la sociedad los seduce compulsivamente, a la vez que les niega radicalmente?

En la actualidad la dirigencia política y económica del país sólo le ofrece a la población dos opciones: por un lado, los cogollos partidistas clientelares corruptos e impenitentes, que una vez que sienten el retorno a un mínimo de normalidad y una disminución de la presión pública, se desdicen de las ofertas renovadoras hechas en momentos de miedo y pretenden retornar a su propia complaciente normalidad. Por el otro, el modelo de capitalismo salvaje de los tecnócratas neoliberales que insisten en que la culpa de la inestabilidad la tienen los políticos y que el programa de ajuste está dando los resultados previstos. El autoritarismo excluyente está representado por esas dos opciones. Si el actual régimen político de democracia limitada no escucha las exigencias de la sociedad y se transforma en la dirección de ampliación y profundización de la democracia, se le estarán abriendo las puertas a salidas más autoritarias (¿militares?), casi con seguridad de derecha. La historia del continente nos ha enseñado - suficientemente - lo que esto significa.

Las alternativas democráticas representadas por los procesos organizativos locales y de base son hoy demasiado incipientes y precarias para ser una alternativa creíble. Ante la ausencia de alternativas, no debe extrañar que la gente esté dispuesta a

jugar con el azar con la esperanza de que algún redentor presente otra salida a la crisis.

*El presente material se basa en una ponencia del mismo título presentada en Identidad nacional y nueva evangelización, IX Semana de Teología del ITER y X Jornada de Reflexión de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, marzo de 1992. En este trabajo se retoman, a veces textualmente, algunos problemas formulados en un texto anterior del autor, «Venezuela: democratización y autoritarismo. Tendencias actuales del sistema político», ponencia presentada en el XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, La Habana, mayo de 1991.

Referencias

*Gómez-Calcaño, Luis; López-Maya, Margarita; Maingón, Thaís, DEL PACTO DE PUNTO FIJO AL PACTO SOCIAL. DESARROLLO Y HEGEMONIA EN VENEZUELA (1958-1985). - Caracas, Venezuela, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana. 1989; PDVSA invertirá 1,8 billones de bolívares.

*Romero, Aníbal, LA MISERIA DEL POPULISMO. MITOS Y REALIDADES DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA. - Caracas, Venezuela, Ediciones Centauro. 1987; Presupuesto de 1991 aprobará asamblea de accionistas. Inversiones de PDVSA superan 200.000 millones de bolívares.

*Fondo Monetario Internacional, VENEZUELA: STAFF REPORT FOR THE 1987 ARTICLE IV CONSULTATION. p23 - 1987; La credibilidad de la democracia.

*Anónimo, MEMORANDUM SOBRE POLITICAS ECONOMICAS DE VENEZUELA. - Caracas, Venezuela. 1991;

*Anónimo, EL NACIONAL - PRENSA. 15/05. pD-9 - Caracas, Venezuela. 1991;

*Anónimo, EL DIARIO DE CARACAS - PRENSA. 26/12. p9 - Caracas, Venezuela. 1987;

*Grupo Roraima:, MAS Y MEJOR DEMOCRACIA. - Caracas, Venezuela, Centro Gumilla. 1992;

*Bisbal, Marcelino; Nicodemo, Pascuale, SIC. LV, 5432. p53-54 - Caracas, Venezuela. 1992;

*Anónimo, EL UNIVERSAL - PRENSA. 27/02. pC2-1 - Caracas, Venezuela. 1992;

*Anónimo, EL DIARIO DE CARACAS - PRENSA. 07/03. p17 - Caracas, Venezuela. 1992;

*Anónimo, El NACIONAL - PRENSA. 12/02. pD-7 -

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 121 Septiembre- Octubre de 1992, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**